



Consejo Económico y Social

Distr. general
17 de diciembre de 2015
Español
Original: inglés

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

60º período de sesiones

14 a 24 de marzo de 2016

**Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
y del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”**

Declaración presentada por Catholic Family and Human Rights Institute, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social*

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

* La presente declaración se publica sin revisión editorial.



Declaración

Desde la creación de las Naciones Unidas se han realizado muchos logros importantes en la promoción del empoderamiento de las mujeres. La Agenda 2030 para el Desarrollo plantea singulares desafíos y oportunidades para seguir promoviendo la igualdad y el empoderamiento de las mujeres a través de políticas racionales de ámbito nacional e internacional.

No se trata solo de un imperativo dictado por la firme determinación de las Naciones Unidas de respetar los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor intrínsecos de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, tal y como se afirma oficialmente en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es necesario que las sociedades prosperen.

Como reconocen cada vez más los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el empoderamiento de las mujeres es necesario para que los Estados logren un desarrollo social y económico que sea favorable al medio ambiente y que pueda calificarse como verdaderamente holístico e inclusivo. Los cambios jurídicos y la elaboración de políticas racionales a nivel nacional, así como la asistencia y la cooperación internacionales, son de vital importancia para la consecución de este objetivo.

No obstante, los cambios jurídicos, las nuevas políticas y las alianzas deben satisfacer las necesidades de las mujeres tal y como ellas las expresan, con el fin de lograr su verdadero empoderamiento. Un elemento fundamental para lograr dicho empoderamiento debe ser escuchar a las propias mujeres expresar sus necesidades, deseos, esperanzas y sueños.

Esto constituye un gran reto, especialmente en los lugares donde las mujeres no son capaces de adoptar decisiones bien fundamentadas debido a la falta de educación, que es seguramente el factor clave para el empoderamiento de la mujer. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estima que la cifra de mujeres analfabetas en todo el mundo asciende a 500 millones.

Estas mujeres son las más pobres entre los pobres. Su falta de educación intensifica las desigualdades inherentes en las estructuras sociales y económicas en las que viven y se relacionan. Así pues, ayudar a las familias y a los Estados a que faciliten a las niñas, y también a las mujeres de todas las edades, una educación adecuada para su empoderamiento debe ser la máxima prioridad de la nueva agenda para el desarrollo.

Otro problema que con frecuencia se ha pasado por alto es una versión descendente de la cooperación internacional que no tiene en cuenta las necesidades ni los deseos de las mujeres tal y como ellas mismas los perciben y los expresan en sus circunstancias vitales concretas, su cultura, su religión y su tradición. Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible no serán suficientes los objetivos y las metas específicos relacionados con el empoderamiento de la mujer, sino que además será necesario empoderar a las mujeres con el fin de que desarrollen su potencial en sociedades y comunidades diversas de todo el mundo, y no a pesar de ellas.

Con frecuencia, las organizaciones internacionales, los organismos gubernamentales de ayuda y las organizaciones no gubernamentales, estructuras todas ellas sofisticadas y bien financiadas, pretenden representar las necesidades y los deseos de las mujeres, pero en realidad solo están transmitiendo a poblaciones enteras de mujeres necesidades y deseos con los que no se sienten identificadas.

Este modelo de colaboración, quizá bien intencionado, se defiende mediante alusiones a la falta de educación y a la consiguiente incapacidad de las mujeres pobres para adoptar decisiones informadas. Sin embargo, dicho modelo no puede, en última instancia, empoderar a las mujeres, pues no les permite desarrollar su pleno potencial. Por el contrario, estos programas transmiten a las mujeres las aspiraciones y los ideales de expertos y especialistas instalados cómodamente entre montañas de privilegios y opulencia, muy lejos del día a día de las mujeres que viven en condiciones de pobreza y miseria.

Este tipo de colaboración no puede ser sostenible a largo plazo, pues se basa en la subyugación de la mujer a una nueva forma de tiranía. Pretende ayudar a las mujeres a lograr sus deseos, y luego sostiene que, debido a su pobreza y a la falta de educación, las mujeres no desean las cosas correctas. También devalúa los tipos de trabajo que no se miden en dólares. Establece que el cuidado de los niños y de los ancianos y el trabajo doméstico tienen más valor si implican recibir dinero a cambio de cuidar a los niños, los padres o el hogar de otras personas. Sobre todo, este modelo no respeta la dignidad ni el valor intrínsecos de la persona humana, especialmente su libertad y autonomía, ni su derecho a ejercer democráticamente su soberanía. Lo más preocupante es que hace que las mujeres dependan de aquellos que quieren colonizar su corazón y su mente.

A este respecto, nos preocupan seriamente las perspectivas de la Agenda 2030 para el Desarrollo con respecto al empoderamiento de las mujeres.

Debido a la misión específica de nuestra organización, nos preocupa en particular el paso atrás que parecen haber dado los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible frente a la firme defensa que los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacían de la mejora de la salud materna. Los nuevos Objetivos, en cambio, se muestran a favor de un enfoque amplio de la salud reproductiva, más orientado a cambiar normas sociales sensibles que sería más adecuado dejar en manos de la legislación nacional.

En la nueva agenda se habla mucho sobre salud y derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, la expresión “salud materna”, que debería ser una de las máximas prioridades de las políticas de población en la nueva agenda para el desarrollo, se ha utilizado con parquedad.

Esto es un síntoma de la clara atención que los países donantes que, en última instancia, financian las políticas de población de las Naciones Unidas prestan en sus programas a la reducción de la fecundidad. Estos países financian generosamente toda clase de anticonceptivos en el mundo en desarrollo, mientras que las intervenciones orientadas a garantizar la seguridad de las madres y sus hijos durante el embarazo y el parto han recibido una financiación insuficiente.

Queda mucho por hacer para lograr que el embarazo y el parto sean más seguros para todas las mujeres. Sin embargo, el 40% de la totalidad de recursos y financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas se destina a la planificación familiar y la anticoncepción, y se invierte aún más en esta última a través de otras políticas con componentes anticonceptivos. Actualmente, incluso se considera que la anticoncepción forma parte de los programas de salud materna.

El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud señala que las muertes maternas solo se han reducido un 22% desde 1990, y no un 50%, como han asegurado algunos, y cada año se producen 300.000 muertes maternas, la mayoría de las cuales podrían evitarse. Hemos abandonado a las mujeres embarazadas, transmitiéndoles al mismo tiempo el mensaje de que, ante todo, deben evitar el embarazo.

En los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible se proponen menos indicadores sobre salud materna que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este hecho supone un paso atrás que conllevará un alto costo para las mujeres y los niños. La falta de una financiación adecuada de la salud materna transmite a las mujeres pobres el mensaje de que no se les permite tener los hijos que deseen.

No obstante, el Instituto Alan Guttmacher informa de que en África menos del 2% de las mujeres casadas afirman no tener acceso a la anticoncepción. La mayoría de las mujeres que no utilizan anticonceptivos se abstiene de hacerlo a causa de los efectos secundarios adversos o por otros motivos personales. Sin embargo, los grupos de planificación familiar exigen que los gobiernos y sus asociados para el desarrollo destinen más dinero a una supuesta “necesidad insatisfecha” en materia de planificación familiar para 220 millones de mujeres en el mundo, equiparándola erróneamente con la falta de acceso. Mientras tanto, hay madres que mueren a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.

El gasto de grandes sumas de dinero para satisfacer una supuesta “necesidad” sin que exista la demanda correspondiente puede derivar en políticas de población que, en el mejor de los casos, constituyen un despilfarro y, en el peor, son coercitivas.

Las inversiones en anticonceptivos están impulsadas por la preocupación ante la elevada fecundidad y la elogiada teoría del dividendo demográfico. Sin embargo, esta teoría no logra explicar el desarrollo económico sin precedentes que acompañó al auge de la natalidad en la era posterior a la guerra. Además, ese dividendo no ha sido uniforme o aplicable en América Latina y el Oriente Medio, donde se ha producido un gran déficit de fecundidad.

Los países con déficit de fecundidad y poblaciones senescentes están atravesando una débil situación económica. La migración y la urbanización son las principales tendencias que darán forma a las poblaciones en los dos próximos decenios, y contribuirán a reducir aún más la fecundidad. La denominada “transición demográfica” no es sinónimo de prosperidad. Quizá sea necesario otro tipo de transición.

Las inversiones en la reducción de la fecundidad prometen una solución instantánea, pero no contribuyen a mejorar la infraestructura sanitaria en su conjunto. No capacitan a los médicos ni a los profesionales de la atención de salud cualificados. No instruyen a las mujeres sobre su fecundidad, sino que la abordan como si se tratara de una enfermedad. Tampoco mejoran las condiciones en las que las mujeres se quedan embarazadas y dan a luz.

Este mismo deseo de encontrar una fórmula mágica para resolver las cuestiones de población se da cuando los organismos de las Naciones Unidas y los agentes no gubernamentales proponen la legalización del aborto como solución para reducir las muertes maternas. El aborto implica siempre la destrucción de una vida humana inocente; muchas veces se convierte en una herramienta de opresión contra las mujeres, mediante el aborto forzado y la selección prenatal del sexo.

Además, solo se podrá hacer frente de manera adecuada a las complicaciones derivadas de los abortos (tanto legales como ilegales) si se invierte en mejoras reconocidas y acreditadas de la salud materna: educación, asistencia cualificada en el parto, atención obstétrica de urgencia y atención prenatal, en particular una nutrición y una hidratación adecuadas.

Ha llegado el momento de invertir en salud materna. Consigamos que de aquí a 2030 los embarazos y los partos sean seguros.
